



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA

RAD. 08-001-41-05-005-2017-00538-01 <INT. 2022-001>.

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

En Barranquilla, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2.022), siendo el día y hora señalados, para proferir sentencia a fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto a la sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario laboral de única instancia promovido por la señora FIORELLA GOMEZ BARRIOS contra la empresa NOVALIVE PHARMA GROUP SAS, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla se constituye en audiencia pública.

Abierta la audiencia, se procede a resolver el asunto sometido a conocimiento.

I. ANTECEDENTES:

1.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

La señora FIORELLA GOMEZ BARRIOS, quien actúa a través de apoderada judicial, presentó demanda ordinaria laboral en contra de la empresa NOVALIVE PHARMA GROUP SAS, para que previos los trámites del presente proceso se declare la existencia de un contrato de trabajo sin solución de continuidad entre el 18 de enero de 2016 y el 26 de agosto de 2016, se declare la terminación unilateralmente y sin justa causa por la demandada, se condene a pagar la indemnización por despido sin justa causa, liquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales por el tiempo laborado, indemnización de que trata el artículo 65 del CST, por la no consignación de cesantías e intereses de cesantías, indemnización por mora en el pago de liquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales, desde el 26 de agosto de 2016 hasta el momento en que se verifique el pago, extra y ultra petita, costas y agencias en derecho.

1.2.- HECHOS:

Afirma la parte actora que la demandada empresa NOVALIVE PHARMA GROUP SAS, fingiendo un contrato de comisión, vinculó a la demandante señora Fiorella Gómez Barrios, para desempeñar el cargo de Visitador Médico, desde el día 18 de enero de 2016 hasta el 18 de febrero de 2016; que a partir del 19 de febrero de 2016 y hasta el 15 de marzo de 2016, existió una relación laboral a través de un contrato verbal; que la demandada dio por finalizado el contrato, comunicándolo a través de whatsapp, el día 16 de marzo de 2016; que por los servicios prestados durante la vigencia del contrato recibió una remuneración de \$344.727 por concepto de salario, \$100.000 por concepto de rodamiento o auxilio de transporte, y un 10% por comisiones respecto al producto vendido. Que prestaba sus servicios de manera personal en la misma dependencia de la demandada, ejerciendo actividades misionales permanentes. Aduce que entre ella y ,Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.

P.B.XX: 3885005-3885156 EXT. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co





**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
ANTIGUO EDIFICIO TELECOM 4° PISO**

la demandada existió una única y verdadera relación laboral sin solución de continuidad entre el 18 de enero de 2016 y el 26 de agosto de 2016, como quiera que entre las partes existió un contrato realidad; que la empresa demandada dio por terminada sin justa causa el contrato verbal aduciendo la venta del 50% de la empresa; que la demandada vinculó a la señora demandante mediante un contrato de comisión, por lo que considera que debe tenerse por ineficaz y por tanto la terminación del contrato se dio sin justa causa; que la demandante no fue afiliada al Sistema de Seguridad Social; que la demandada le proporcionaba a la demandante un panel médico para realizar las visitas y al terminar debía reportar de manera física o por vía electrónica la gestión realizada durante el día; que cumplía sus funciones en los horarios establecidos por la demandada, laborando durante el día de manera continua; e igualmente afirma que durante el tiempo en que estuvo vinculada con la empresa demandada no le fueron pagadas las cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, prestaciones sociales y acreencias laborales de conformidad con el artículo 65 del CST. Que al momento de la terminación del contrato devengaba una remuneración promedio mensual de \$889.454; que ante el no pago de las acreencias laborales por parte de la demandada, acudió ante el Ministerio del Trabajo, sin que fuera posible llegar a un acuerdo conciliatorio. Que el 26 de octubre NOVALIVE PHARMA GROUPS SAS realizó un pago por valor de \$628.100 por concepto de comisiones de los meses de julio y agosto de 2016.

1.3.- ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA:

La demanda fue repartida inicialmente al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla el 5 de junio de 2017, el cual mediante auto del 25 de julio del mismo año declaró la falta de competencia para conocer del presente asunto debido a la cuantía de las pretensiones y ordenó su remisión a los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas Laborales de esta ciudad. Sometida nuevamente a reparto el 13 de septiembre de 2017, correspondió su conocimiento al Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales, donde fue admitida mediante auto del 18 de octubre de 2017, a donde se envió aviso de citación de fecha 8 de noviembre de 2017, el cual fue recibido por la demandada el 25 de noviembre de 2017, conforme se evidencia en el certificado emitido por la empresa Distrienvios. Es así que, mediante auto del 12 de mayo de 2021, se señaló el 2 de julio de 2021, para llevar a cabo audiencia. Posteriormente, en auto adiado 27 de septiembre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo CSJATA21-140 del 15 de septiembre de 2021, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura Seccional Atlántico, dispuso la remisión del expediente al Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, decisión que fue debidamente notificada a las partes, mediante correos electrónicos del 27 de septiembre de 2021. En auto de 18 de febrero de 2022 el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, avocó el conocimiento el presente proceso y señaló el 28 de febrero de 2022 para llevar a cabo la audiencia única de trámite y juzgamiento.

1.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

La entidad demandada, no se hizo presente en la audiencia programada, como tampoco
,Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.
P.B.XX: 3885005-3885156 EXT. 2030. www.ramajudicial.gov.co
Barranquilla – Atlántico. Colombia
Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co





contestó la demanda.

1.5.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Fue proferida el 28 de febrero de 2022, por el Juez Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, en la cual resolvió: “*PRIMERO. – ABSOLVER a la demandada NOVALIVE PHARMA GROUP SAS, de todas y cada una de las pretensiones incoadas por la señora FIORELLA GÓMEZ BARRIOS. SEGUNDO. – Sin costas en esta instancia. TERCERO. – A través del aplicativo TYBA remítase el expediente ante el superior funcional para que se tramite el grado jurisdiccional de consulta. CUARTO. – Una vez se tramite grado jurisdiccional de consulta, por secretaria remitir sin necesidad de auto previo el expediente al Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Barranquilla, por haberse cumplido la finalidad del acuerdo CSJATA21-140 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura.*”

Fundamentó su decisión en que entre las partes se suscribió un contrato de comisión, de carácter civil, ajeno al contrato laboral en el que se pactaron cláusulas propias de este tipo de contratos; además, de las pruebas allegadas, como son el contrato de comisión y una relación de médicos y entidades a las que pertenece ese médico que debe visitar para promocionar el producto relacionado en el acápite de obligaciones del contrato de comisión, así como de los oficios de comunicaciones entregados por la empresa a la demandante para repartir entre diferentes médicos, fueron los únicos elementos probatorios allegados en físico por la parte demandante, al igual que de los extractos bancarios aportados por la misma con los cuales no se prueba el elemento subordinación respecto a la empresa demandada. En cuanto a los presuntos chats aportados por la parte demandante, no le otorgó valor probatorio ni siquiera de carácter indiciario, por no tener certeza de quienes son las personas que se encuentran en esa comunicación. Así mismo, estimó que tampoco con las demás pruebas allegadas se acredita la subordinación.

1.6.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA:

La demanda fue repartida a este Juzgado el 28 de febrero de 2022, y en proveído del 10 de marzo de 2022, se resolvió admitir el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia de primera instancia que resultó totalmente adversa a las pretensiones de la demandante, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 69 del CPTSS, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2.007, y la sentencia C-424 de 2.015 de la Corte Constitucional, para lo cual resolvió correr traslado a las partes por el término común de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del auto, para que presentaran sus alegatos de conclusión, remitiéndolos a la dirección de correo electrónico del Juzgado, y se fijó fecha en el día de hoy <31 de marzo de 2022> para llevar a cabo la audiencia de trámite y fallo de que trata el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2.007, en concordancia con el artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio de 2.020, a fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta con relación a la sentencia de primera instancia.

,Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.

P.B.XX: 3885005-3885156 EXT. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co





**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
ANTIGUO EDIFICIO TELECOM 4° PISO**

Los apoderados judiciales de las partes no hicieron uso del término para alegar.

Agotado como se encuentra el trámite impreso al presente asunto indicado en nuestra ley adjetiva laboral, al no apreciarse causales de nulidad que invaliden lo actuado, y la satisfacción de los presupuestos procesales, como quiera que tampoco existe impedimento legal de este funcionario, se procede a resolver el fondo de la litis, previas las siguientes:

II.- CONSIDERACIONES:

Los aspectos a dilucidar en este grado jurisdiccional de consulta consisten en determinar en primer lugar, si entre la demandante, señora FIORELLA GOMEZ y la demandada, NOVALIVE PHARMA GROUP SAS, existió un contrato de trabajo entre el 18 de enero de 2016 y el 26 de agosto del mismo año, de ser así, si este contrato terminó unilateralmente sin justa causa atribuible a la demandada, y como consecuencia de ello la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa, liquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales por el tiempo laborado, indemnización por la no consignación de cesantías e intereses de cesantías, indemnización por mora en el pago de liquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales, por el término de todo el contrato.

Sea lo primero advertir que la parte demandante soporta las pretensiones de su demanda en la existencia de un único contrato de trabajo verbal con la empresa demandada, el cual alega se desarrolló entre el 18 de enero de 2016 y el 26 de agosto de 2016, bajo el supuesto que fue vinculada por un aparente contrato de comisión mercantil que milita en el informativo por el mismo período (PDF.11-13).

Es del caso precisar que, la norma con la cual se pretende abrigar la demandante, esto es el artículo 65 del CST, modificado por el artículo 29 Ley 789 de 2.002, que trata de la indemnización de la indemnización por falta de pago de salarios y prestaciones, dispone:

“Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero.



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
ANTIGUO EDIFICIO TELECOM 4° PISO**

2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia.

PARÁGRAFO 1o. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de mora.

PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en el inciso 1o. de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente.”

También que si bien el artículo 24 del C.S.T., señala que “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, sobre esta presunción legal, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde vieja data ha dicho:

“La presunción legal a que se refiere el artículo 24 no define necesariamente la contienda, con imposición de derecho. Su virtud consiste en relevar al trabajador de toda la actividad probatoria, en torno a la existencia del vínculo contractual; pero si la única que está obligado a desplegar conlleva la negación de la subordinación, mal puede lograrse el reconocimiento de un contrato de trabajo. Todavía mas: si la presunción resulta desvirtuada por cualquier otra probanza, así provenga ella del propio trabajador, el resultado desestimatorio será el mismo, pues una cosa es la ventaja probatoria que implica presunción legal y otra muy distinta la definición de la litis por el mérito de las pruebas”. (CSJ, Cas. Laboral, Sent. Abr.9/65, Rev. D. del T. No 244-46 (pág.163).

Lo anterior quiere decir, que si bien el trabajador tiene a su favor una ventaja probatoria por medio de la presunción que consagra el artículo 24 del C.S.T., no es menos cierto que dicha presunción no define el litigio y además admite prueba en contrario, de ahí que es indispensable realizar la respectiva valoración probatoria para determinar si en efecto se acredita una relación laboral como lo aduce la demandante, pues, no debe desatenderse que la finalidad de la prueba es lograr la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos que estructuran la relación material que se controvierte en el proceso, incumbiendo a las partes “probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen”, tal como lo disponía el anterior artículo 177 del CPC, previsión reiterada en el actual y vigente artículo 167 del CGP, aplicable por integración normativa en materia laboral (Art.145 CPTSS), principio en materia probatoria que impone a las partes la carga de incorporar al litigio todos los elementos de convicción necesarios para lograr sacar adelante su pretensión o excepción, respectivamente. Esto es lo que se denomina carga de la prueba que va dirigida en dos direcciones, la primera hacia la parte que reclama los derechos y la segunda hacia la parte a quien se le hace la reclamación, ante lo cual el Juez debe decidir de conformidad si los hechos debatidos se encuentran o no demostrados.

,Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.

P.B.XX: 3885005-3885156 EXT. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co





**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
ANTIGUO EDIFICIO TELECOM 4° PISO**

Al respecto, la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 3133-2021, Radicado 8423 de 13 de julio de 2021, Magistrada Ponente Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota, reiteró:

“Por último, sin perjuicio de la senda escogida, debe recordarse que los extremos inicial y final de la relación laboral no se presumen y, por ende, constituye obligación procesal de la parte demandante demostrarlos, so pena de asumir las consecuencias adversas que ello conlleve, tal y como ocurrió en el presente caso (CSJ SL17135-2016). Sobre el particular, esta Corte ha considerado que, además de demostrar la actividad personal que da lugar a la presunción que se cuestiona, es necesario acreditar otros supuestos de hecho necesarios para la procedencia de las obligaciones laborales que el trabajador reclama. En CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 42167, sostuvo:

[...] recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no releva al demandante de otras cargas probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos transcendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros.

En sentido similar, en CSJ SL, 23 sep. 2009, rad. 36748, refirió:

Ahora, tiene razón la censura cuando afirma que al promotor del proceso le atañe acreditar otros supuestos relevantes dentro de esta clase de reclamación de derechos, entre ellos los extremos temporales de la relación de trabajo, salario devengado, jornada laboral etc., pues de antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa está obligado a probarla; pero establecer en el caso que nos ocupa, si tales aspectos aparecen o no demostrados, es un asunto puramente fáctico y por ende ajeno a la vía escogida para el ataque.” <Negrilla y subraya fuera de texto>.

Revisado el plenario, a pdfs 11 y 12 se encuentra el contrato de comisión mercantil suscrito entre la señora FIORELLA GOMEZ BARRIOS y el señor BILLY CERVANTES PARRA en calidad de Gerente de la sociedad NOVALIVE PHARMA GROUP SAS, en el que se pactó una duración de un mes a partir del 18 de enero de 2016, con el objeto de promocionar unos productos farmacéuticos a un panel de Médicos que suministraría la demandada así como los otros que conozca la demandante. Igualmente, se pactó además de una remuneración fija una comisión del 3% por la venta de productos y se le impuso al comisionista, hoy demandante, la obligación de rendir un informe diario de las visitas realizadas. Se advierte que respecto a la naturaleza y duración del contrato celebrado entre la demandante y la empresa NOVALIVE PHARMA GROUP SAS, el apoderado de esta última, quien actuó en la diligencia de conciliación ante el Ministerio del Trabajo el 26 de octubre de 2016 (pdf 29), afirmó que “*el contrato de comisión inicialmente el contrato se desarrolló en el término del 18 de enero de 2016 hasta el 18 de febrero de 2016. cuando finalizo, el cual finalizo de manera voluntaria por las partes sin despido, en cuanto estamos hablando de un contrato mercantil, en una segunda eventualidad por acuerdo entre las partes se tomó la decisión de reiniciar nuevamente con el contrato de comisión donde se le iba a reconocer \$3.000*

,Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.

P.B.XX: 3885005-3885156 EXT. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co





**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
ANTIGUO EDIFICIO TELECOM 4° PISO**

por medico visitado y 10% de comisión por venta efectiva de productos farmacéuticos, incluyendo el rodamiento por valor de \$200.000 mensuales para la ejecución del contrato, este contrato finalizo el 26 de agosto por acuerdo entre las partes”, es decir, de sus afirmaciones se evidencia la fecha de la terminación de una segunda relación contractual, mas no se evidencia la fecha de inicio de esta, sumado a que la misma parte demandante en los hechos de la demanda, en especial los hechos 1° y 2° expone que la relación contractual con la demandada se dio entre el 18 de enero de 2016 y el 18 de marzo de 2016 y bajo la modalidad verbal entre el 19 de febrero de 2016 y el 15 de marzo de 2016, y luego en el hecho 4° señala inequívocamente que la siguiente relación inició el 1° de julio de 2016 y finalizó el 26 de agosto de 2016, circunstancia que impide al Funcionario Judicial establecer con certeza en esas condiciones, esto es, sin suficiente soporte probatorio y bajo meras afirmaciones, los extremos temporales de una relación contractual.

Es cierto que conforme al parágrafo 2° del artículo 31 del CPTSS, la falta de contestación de la demanda constituye un indicio grave en contra del demandado, sin embargo, conforme al artículo 240, 241 y 242 del CGP, aplicables por integración normativa en esta especialidad, los indicios no constituyen plena prueba, y requieren que sean concordantes con las demás pruebas que obren en el proceso, de ahí que resulta necesario que este indicio por la no contestación de la demanda junto con el contrato mercantil precitado y la diligencia de no conciliación sean apreciados en su conjunto con las demás pruebas en el proceso en aras de definir si el contrato laboral alegado se demostró, de donde se ha advertido, con lo hasta el momento analizado, que los extremos aducidos en la demanda no resultan claros, y en todo caso aunque en gracia de discusión así se tuvieran, existe el aludido contrato mercantil.

En ese orden de ideas, y continuando con el análisis probatorio, se observa que, por otra parte, la señora demandante pretende también acreditar la existencia de un contrato de trabajo, los extremos temporales, la remuneración y la subordinación con respecto a la demandada NOVALIVE PHARMA GROUP SAS, mediante la impresión de una serie de chats realizados con supuesto personal de la empresa demandada mediante la utilización de la aplicación WhatsApp (pdf 53-102). Revisada estas documentales no se evidencia que se trate de chats grupales, sino principalmente de conversaciones entre dos personas, una de ellas la señora Fiorella Gómez y la otra, supuestamente, el señor Rubén Cervantes Novalive.

El Código General del Proceso aplicado por analogía a los juicios laborales en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del CPTSS, en su artículo 168 dispone que el Juez rechazará las pruebas ilícitas.

Sobre las pruebas ilícitas la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 30.838 del 31 de julio de 2009, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, esgrimió que:

«En efecto, mayoritariamente se ha concebido por la doctrina nacional, extranjera y la jurisprudencia que la prueba ilícita es aquella que se ha obtenido o producido con violación de derechos y garantías



**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
ANTIGUO EDIFICIO TELECOM 4° PISO**

fundamentales, género entre las que se encuentran las pruebas prohibidas. Ella puede tener su génesis en varias causalidades a saber:

(i) Puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la dignidad humana (art. 1° Constitución Política), esto es, efecto de una tortura (arts. 137 y 178 C. Penal), constreñimiento ilegal (art. 182 C.P.), constreñimiento para delinquir (art. 184 C.P.) o de un trato cruel, inhumano o degradante (art. 12 Constitución Política).

(ii) Así mismo la prueba ilícita puede ser consecuencia de una violación al derecho fundamental de la intimidad (art. 15 Constitución Política), al haberse obtenido con ocasión de unos allanamientos y registros de domicilio o de trabajo ilícitos (art. 28 C. Política, arts. 189, 190 y 191 C. Penal), por violación ilícita de comunicaciones (art. 15 C. Política, art. 192 C. Penal), por retención y apertura de correspondencia ilegales (art. 15 C. Política, art. 192 C. Penal), por acceso abusivo a un sistema informático (art. 195 C. Penal) o por violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial (art. 196 C. Penal.)

(iii) En igual sentido, la prueba ilícita puede ser el efecto de un falso testimonio (artículo 442 Código Penal), de un soborno (artículo 444 ibidem), de un soborno en la actuación penal (artículo 444 ib.), o de una falsedad en documento público o privado (artículos 286, 287 y 289 ib.).

Y más adelante puntualizó:

“En este último punto agregó la Corte que los efectos de la ilicitud, van más allá de la exclusión del elemento de convicción, hasta menguar la validez procesal, pues la práctica de la prueba afectaría el proceso, y atraería consigo la nulidad de todo lo actuado.”

En cuanto al derecho fundamental a la intimidad, la misma Corporación, CSJSCP, en el fallo del 29 de julio de 2.015, de radicado No. 42307 de 2015, M.P. Dr. Patricia Salazar Cuellar, explicó:

“En síntesis, el núcleo esencial del derecho a la intimidad está definido por un espacio inmaterial protegido de intromisiones, que supone la existencia y disfrute de un ámbito reservado para cada persona y su familia, exenta del poder de intervención del Estado o de los demás, que permita un completo desarrollo de la vida personal, sin que su ejercicio sea absoluto, pues puede afectarse en los eventos establecidos en la ley y por la autorización de su titular”.

Como se desprende de los apartes jurisprudenciales antes transcritos, tratándose los chats aportados por la demandante, de una serie de conversaciones con otra persona de la cual se desconoce si se trata de un número telefónico institucional de la demandada o que pertenece a un chat grupal de la demandada, el Juzgado de todos modos no puede referirse a ella, dada la notable eventual vulneración al derecho fundamental a la intimidad de una de las partes involucradas.

En cuanto a los soportes de pago, que la demandante pretende acreditar mediante los impresos de los estados bancarios mensuales, se abstiene también el Despacho de pronunciarse sobre los mismos, por carecer de firma de funcionario responsable, igual suerte corren las relaciones de médicos y entidades denominado cronograma de trabajo (pdf 15-22), ya que la misma carece de firma de responsable o de documento que soporte la remisión por parte de la empresa demandada a la demandante señora Fiorella Gómez.

,Calle 40 NO. 44-39. Piso 4. Edificio Telecom.

P.B.XX: 3885005-3885156 EXT. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co





**JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
ANTIGUO EDIFICIO TELECOM 4° PISO**

Así las cosas, dado el insuficiente material probatorio que permita concluir la existencia del contrato laboral deprecado bajo los extremos temporales indicados con la demanda frente al contrato mercantil aportado por la propia demandante, conlleva inexorablemente a impedir la declaratoria o imposición de cualquier condena sobre el pago de los conceptos laborales reclamados ya que al juzgador no le asiste la facultad de fallar con fundamento en suposiciones o conjeturas, por lo que le asistió razón al A-quo al disponer la absolución de la demandada.

Con base en lo anterior, se impone confirmar la sentencia objeto de consulta, por los motivos antes expuestos.

Sin costas en este grado de jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

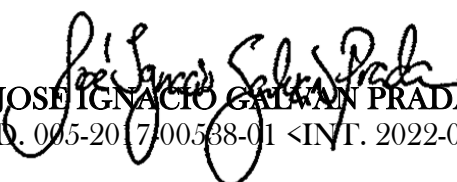
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia consultada, por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO: Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.

TERCERO: Devuélvase el expediente oportunamente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Juez,


JOSE IGNACIO GALVÁN PRADA
RAD. 005-2017-00538-01 <INT. 2022-001>.